

LIBERTAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: LOS NUEVOS PARADIGMAS*

JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO**

NO VIVIMOS TIEMPOS de certezas ideológicas ni científicas. Podemos decir que estamos a la intemperie. Nuestra incertidumbre guarda relación directa con la ampliación del conocimiento y de nuestra capacidad de actuar. Y los problemas no pueden esperar. Existe una evidente desproporción entre el diagnóstico de los mismos y el diseño de soluciones adecuadas e imaginativas. Requerimos con urgencia recuperar el asombro ante lo nuevo y volver a reflexionar con libertad de espíritu.

En esta tarea nos ayuda el resurgimiento de la filosofía política, luego del término de la Guerra Fría. Ya no basta con describir sociológicamente la realidad ni menos con confiar en las leyes de la economía. En los años 60 todos los cientistas sociales se consideraban sociólogos. Hoy la sociología no pretende —como ayer— dictar los fines que nuestras sociedades deben alcanzar, dejando un espacio libre para la reflexión sobre los principios que deben regir sus destinos. Y esta preocupación política adquiere dimensiones universales: ¿en qué lugar del mundo, en qué cita internacional, al analizar los desafíos que tenemos por delante, no se afirman valores y normas de conducta? Incluso en la actitud de quienes se sustraen de los asuntos públicos y se recluyen en su vida privada podemos advertir, en vez de conformismo, un cierto reproche ético a la situación presente.

Luego de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de los regímenes fascistas no se ha puesto en duda la soberanía popular como principio legiti-

*Exposición en el foro "Libertad, Economía y Sociedad", Buenos Aires, julio de 2001.

**Abogado, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile y licenciado en Ciencias del Desarrollo del Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (Ilades), senador de la República, autor de *Chile, un nuevo camino*; *La pausa de la razón*, entre otras.

mador del poder, salvo la excepción de ciertas teorías extremas surgidas junto con nuestros regímenes militares, pero que no echaron raíces. Hoy la reflexión política se preocupa de otros temas como la gobernabilidad democrática de los procesos, las relaciones entre las instituciones y la sociedad, los mecanismos efectivos de toma de decisiones, las fallas de la representatividad política, el pluralismo y la formación del consenso, la ciudadanía y la participación, el papel del sistema de comunicaciones, el nuevo papel de los jueces, el surgimiento de instituciones constitucionales neutras, los derechos de las personas y los límites del poder, el desarrollo del Derecho Internacional y su relación con el Derecho de cada Estado en un mundo global.

Son los anuncios –como diría Hegel– de una nueva filosofía capaz de desentrañar el significado de este período de cambio de época, y ese cavilar tiene como piedra angular la afirmación de la libertad como principio, como derecho y como posibilidad para todos.

EL REINADO DEL CRECIMIENTO

El análisis de la relación entre esa libertad y el crecimiento económico nos permite reconocer que éste, el aumento constante y potencialmente indefinido de la producción de bienes y servicios, ha pasado a ser desde los años 50 del siglo pasado una verdadera obsesión cultural. Salvo las voces disidentes nacidas de las primeras manifestaciones de la amenaza ecológica que postularon un crecimiento cero, nadie lo ha puesto en entredicho. Oscilando siempre entre el triunfalismo de la voluntad y la desilusión de los resultados, esta expresión de la idea de progreso nos acompaña hasta hoy.

Sólo recientemente ella ha sido revisada en su conceptualización. Pero permanece, sin lugar a dudas, la convicción en todos nosotros de que el crecimiento de la economía es una condición indispensable, aunque no suficiente, para superar la pobreza. La experiencia nos demuestra que sin crecimiento económico las políticas públicas pierden eficacia, los problemas sociales se agudizan y la credibilidad política se resiente.

La afirmación más común –que constituye la sustancia del llamado “pensamiento único”– es que la libertad de mercado es un requisito del crecimiento de la economía, y que éste trae consigo, como consecuencia natural, una mayor libertad en todos los ámbitos. Se cerraría así un círculo virtuoso, que lleva a los pensadores neoliberales en boga a desechar y combatir prácticamente cualquier forma de regulación jurídica, de intervención del Estado o de precepto ético que pudiera entorpecer ese dinamismo.

El pensamiento de Friedrich von Hayek, por ejemplo, es un buen mitón de muestra. En su obra *Derecho, legislación y libertad* Von Hayek sostiene que el mercado, en cuanto sistema espontáneo, es capaz de coordinar con gran eficacia los millones de informaciones emanadas de los individuos,

creando un orden económico, social y político. Tesis de Milton Friedman y tantos otros que pretenden responder al reflujo de la sociología con el imperio de la teoría económica clásica.

Esta no es una forma de pensar ajena a la historia de los países de América Latina. El ideario liberal impulsó la independencia y se desarrolló en polémica con el monopolio mercantil español. En Chile, como es sabido, tuvo una importante influencia la generación argentina exiliada de la dictadura de Rosas: Sarmiento, Alberdi, López. Igual que en la década de los 80, entonces se miraba más a Inglaterra y a los Estados Unidos que a la Europa continental sacudida por los procesos políticos que siguieron a la caída de Napoleón. Y apelando a Stuart Mills se explicaba la estabilidad anglosajona por el predominio del espíritu pragmático. Así José Victorino Lastarria afirmaba que “ese espíritu positivo es en verdad el que ha salvado a los países ingleses del naufragio general... Si las repúblicas americanas hubieran podido imitarlo, su progreso moral y político habría sido más efectivo en los 50 años que han atravesado de vida independiente, pero no pudo ser así porque la analogía de sus creencias, sus tradiciones y sus hábitos las han llevado naturalmente a las influencias de Francia, y por consiguiente a desaprovechar y contrariar su revolución, como Francia ha contrariado la suya”.

Y el mismo Lastarria, que representó en el siglo XIX el paso del liberalismo a una tendencia más social, las emprendía contra “la injerencia del Estado en los arreglos de la actividad industrial”, pues su único fundamento sería “que los hombres son incapaces de dirigirse por sí mismos”; rechazaba asimismo “la idea errónea de que es posible hacer desaparecer la miseria y todos los abusos por medio de un arreglo artificial dictado y mantenido por el Estado”; éste debe limitarse a suministrar las condiciones para el buen funcionamiento del mercado. Al citar estas palabras, pareciera escuchar a muchos de nuestros neoliberales con su teoría del “Estado mínimo”.

Estas ideas triunfaron en América Latina entre 1870 y 1930, durante el período del crecimiento hacia fuera, y han vuelto con mayor fuerza en la etapa de la globalización.

Ahora bien, el liberalismo como núcleo central de pensamiento propio de la modernidad ha tenido múltiples desarrollos intelectuales y políticos, que corresponden a diferentes procesos históricos. Lo que hemos tenido últimamente es una acentuación del liberalismo económico en desmedro de la teoría democrática, surgida también del liberalismo bajo el impacto de la cuestión social. ¿No hemos visto acaso la justificación de la dictadura política o la restricción de las libertades públicas por las exigencias de la libertad económica en diversas latitudes? Caído el Muro de Berlín esas voces se han acallado. Más bien predomina la tesis expresada por Fukuyama de la confluencia entre economía de mercado y democracia política.

Sin embargo, no podemos ser ingenuos: el mercado no sólo es eficiente; también es injusto y cuando es abandonado a su propia lógica puede provo-



Sarmiento.



Alberdi.



Lastarria.

car crisis de consecuencias imprevisibles, como la vivida en los años 30 y la que ahora estamos padeciendo.

No es casualidad que Dani Rodrik, en un trabajo para el Banco Mundial, reconozca que América Latina atraviesa por “un nivel desconcertante de inseguridad económica”, causada por la forma en que superó la recesión de los 80 y por la volatilidad de los flujos de capital que siguen los dictados de los inversionistas de corto plazo, produciendo un divorcio entre la política macroeconómica y la economía real. Todo ello lleva a un pesimismo que abarca esta vez también a las clases medias, no sólo en países como México, Brasil y Argentina, sino incluso en Chile, que vive una lenta recuperación económica luego de un período prolongado de crecimiento seguido de la crisis de 1998.

El mismo Rodrik señala que una visión estrecha de las políticas de desarrollo fundada en el Consenso de Washington, ha impedido el surgimiento de una visión alternativa o al menos complementaria que tome en cuenta el mayor riesgo de los trabajadores y el impacto de la cesantía en los hogares provocado por las políticas de privatización, desregulación y reestructuración económica. Las respuestas que el FMI ha dado a las crisis no toman en cuenta sus factores específicos. Así ocurrió cuando en 1997 aplicó en Tailandia e Indonesia la misma receta que había utilizado en México, lo que fue contraproducente. Y así puede volver a suceder si no hay una mayor apertura mental, que está siendo reclamada incluso por personas que conocen como funciona esa institución.

No se debe olvidar que mientras en los Estados Unidos la respuesta a la crisis de los años 30 trajo consigo el fortalecimiento de la protección social, inclinando a las clases medias a favorecer la solidaridad bajo un papel activo del gobierno, en América Latina las políticas de ajuste han sido orientadas en favor del mercado, restringiendo el papel del Estado y aumentando la inseguridad de las personas. Y sin obtener hasta ahora los resultados esperados: las economías siguen inestables y los 196 millones de latinoamericanos y caribeños que a comienzos de los 90 vivían en situación de pobreza han pasado a ser 224 millones en la actualidad.

Una democracia funcionante y participativa, esa que Duverger llamaba gobernante, debiera ser un buen antídoto a la inseguridad económica y social. Lamentablemente tampoco en este campo nuestros países cuentan con un sistema político en forma. En América Latina el peligro no consiste tanto en una ruptura abrupta del régimen democrático como en un progresivo deterioro de la calidad de la política, que puede llevar a situaciones de desgobierno o a involuciones autoritarias bajo formas civiles. Ha aumentado la separación entre la gente y la política con sus rituales republicanos. Las democracias aparecen débiles frente a quienes violan la ley y la opinión pública pierde esperanza en su capacidad para detener la delincuencia, la

corrupción o el narcotráfico. Han descendido los índices que miden la confianza en las instituciones.

Por eso la reforma de la política y de las instituciones de representación ciudadana, así como una reingeniería del Estado, son tareas de primera prioridad.

Pero ello supone una visión del desarrollo donde libertad y crecimiento económico se entrelacen en forma diferente. Un desarrollo que en palabras del Premio Nobel de Economía Amartya Sen sea “un proceso esencialmente de ampliación de las capacidades y libertades de las personas”. No se trata sólo de incrementar la producción de bienes y servicios, sino de cambiar en profundidad la calidad de vida de los seres humanos o, recordando palabras de Paulo VI, pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas de vida. Y ello sólo lo pueden hacer las propias personas. Lo fundamental es que existan las condiciones para que ellas puedan, solidariamente, desplegar su creatividad.

GLOBALIZACIÓN Y NUEVOS ACTORES

El escenario en que esa tarea debe llevarse a cabo ha cambiado profundamente. La globalización ha acentuado el desequilibrio existente desde el siglo XIX entre las exigencias de una economía cada vez más planetaria en su funcionamiento y el accionar de los estados nacionales. En la década del 50 sólo el 7 por ciento del producto interno de los países se exportaba. Hoy ese porcentaje ha aumentado a 25 por ciento, y hay países como Suecia o Chile en que supera el 40 por ciento. La globalización se acelera abarcando todos los ámbitos de la vida social. El desarrollo científico y tecnológico —con avances como Internet— ha redefinido los paradigmas del tiempo y del espacio: vivimos en la simultaneidad. Al experimentar la historia universal lo que Braudel llamaba el “tiempo del mundo”, se favorece el surgimiento de una conciencia cívica planetaria al margen de las categorías y estructuras de los partidos políticos, sean de derecha, centro o izquierda.

Ello contribuye a acentuar la falta de correspondencia entre los procesos económicos globales, por una parte, y las estructuras políticas nacionales e internacionales, por otra.

Esta situación repercute en un debilitamiento de los estados nacionales y en el surgimiento de una sociedad civil transnacional formada por un conjunto de nuevos actores. Se ha visto afectada la seguridad jurídica y la eficacia de los estados y se ha debilitado la identidad colectiva que les sirve de fundamento. La gente percibe que el gobierno de cada nación ha dejado de ser la palanca fundamental del sistema de poder, mientras se refuerzan los actores no estatales de la vida internacional: las empresas, los organismos

no-gubernamentales, las iglesias y, sobre todo, los ciudadanos con una nueva conciencia de sus derechos. Vivimos un sistema mundial unipolar desde el punto de vista militar, económicamente tripolar e interdependiente a nivel de la sociedad civil global emergente.

En el debate en curso sobre el significado de la globalización podemos constatar dos reacciones básicas: los escépticos, que con una retórica de defensa nacionalista propugnan el proteccionismo y pretenden refugiarse en las fronteras del país, y los entusiastas, que aceptan sin crítica el proceso con una confianza ciega en el mercado mundial. El fascismo fue una manifestación de la irracional defensa de lo propio frente a lo cosmopolita y la autarquía inspiró su política económica. Hay actualmente reacciones conservadoras frente a la globalización que se expresan en el aumento del gasto militar y el rechazo a los inmigrantes, cuando no se cae en abierta xenofobia o racismo.

También existe una versión de izquierda antiglobalización: ¿no llevaba acaso la teoría de la dependencia a un aislamiento del Tercer Mundo respecto de los países desarrollados? Los jóvenes que protagonizan las protestas antiglobalización no tienen una ideología común aunque existen documentos que les sirven de inspiración, como "El informe de Lugano", de Susan George o la "Ilusión neoliberal", de René Passet. Más bien expresan el malestar frente a las injusticias que ese proceso trae consigo.

Pero también son transversales las visiones eufóricas frente al cambio de época y el "fin de la historia": prevén un mundo de individuos autónomos conectados en red, que no se organizan políticamente porque el gobierno de las cosas parece haberse vuelto meramente administrativo.

La globalización –a mi juicio– nos plantea antes que nada un gran desafío netamente político. Max Weber consideraba un error pensar que la armonía social y la libertad surgirían espontáneamente del libre juego económico, y planteaba una interrogante de gran actualidad: "¿Cómo puede ser mantenida la democracia y la libertad a largo plazo en el capitalismo avanzado?". El mercado, sobre todo si es global, requiere certeza jurídica, contrapesos adecuados y, en especial, conducción. Hay una nueva demanda de gobernabilidad, que se expresa en los intentos de reformar la Carta de las Naciones Unidas para hacerla más democrática y eficaz, en los planteamientos por transformar las instituciones nacidas de los acuerdos de Bretton Woods, en el Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional –que Argentina ya ratificó– para no hablar de los diversos procesos de integración en curso y los acuerdos de libre comercio.

Se trata de ir construyendo una gobernabilidad global que tome en cuenta los diferentes escenarios en que transcurre la política actual, que se oriente hacia un bien común general.

Pero no podemos conducir el proceso de desarrollo sólo con el freno. Los equilibrios macroeconómicos son indispensables pero no suficientes.

No hay piloto automático. Necesitamos múltiples palancas en nuestras manos para que opere el círculo virtuoso entre aspiraciones ciudadanas, crecimiento económico, libertades públicas y participación y justicia social, para lograr la armonía entre cosas tan diversas.

VALORES ORIENTADORES

Considero ciertos criterios orientadores básicos para la renovación del pensamiento y la acción: Si alguna lección podemos sacar del siglo que terminó es la importancia de los derechos humanos. Efectivamente, esos derechos tal cual han sido formulados jurídicamente en diversos tratados y acuerdos internacionales, constituyen un denominador común de carácter ético, que sirve de elemento conectivo para la vida en común y de pauta para el Derecho al momento de prohibir conductas y de incentivar comportamientos.

Esos derechos pueden ser concebidos como otras tantas manifestaciones de la libertad. En un reciente documento del PNUD, que establece un vínculo entre derechos humanos y desarrollo humano, se definen siete libertades básicas: libertad de cualquier forma de discriminación; libertad de la necesidad, para disfrutar de un nivel decente de vida; libertad para desarrollarse y hacer realidad la potencialidad de cada uno; libertad del temor, de las amenazas contra la seguridad personal; libertad de la injusticia y de las violaciones a la ley; libertad para participar en las decisiones, y libertad para tener trabajo, sin explotación.

El desarrollo, tal como decíamos, es visto como el proceso y el efecto de la expansión de las libertades de todos. Se ha dado así un paso importante en la construcción de un parámetro para inspirar la política del siglo XXI, que apela a los ciudadanos como sujetos más allá del mercado y del Estado.

No es casual que personas que han tenido tanta responsabilidad en las instituciones financieras internacionales, como Michel Camdessus, afirmen que “a la mano invisible del mercado hay que agregar la mano visible de la justicia del Estado y la mano de la solidaridad”. En otras palabras, la justicia y la solidaridad son reconocidas como referentes éticos de la economía. Y la vigencia de los derechos humanos, como indicador del desarrollo humano.

La vinculación entre ambos conceptos potencia la sustentabilidad social y otorga legitimidad política al proceso económico y social. Pese a que las orientaciones y formas estratégicas de los derechos humanos y de desarrollo humanos son distintas, no hay una diferencia fundamental entre sus materias respectivas: los derechos económicos, sociales y culturales son tan importantes como los derechos políticos y civiles.

Al respecto me parece oportuno traer a colación la “Teoría de la justicia” de John Rawls, porque ella sin apartarse del liberalismo político da un paso en esa dirección y porque ha marcado la reflexión política de las últimas tres

décadas. El establece dos principios complementarios: el primero, la igualdad de las libertades (cada persona debe gozar de derechos y libertades iguales lo más amplios posible) y el segundo, según el cual las desigualdades deben ser organizadas de tal manera que razonablemente se pueda afirmar que a todos beneficia y que correspondan a funciones abiertas a todos. Rawls abre así una puerta para repensar las bases morales y políticas de la sociedad, reintroduciendo el problema de las desigualdades en la tradición liberal del régimen constitucional. Lo que me interesa destacar es el vínculo entre libertad de todos, diferencias justas e igualdad de oportunidades. Ello ha animado el debate entre pensadores comunitaristas, libertarios, republicanos y socialistas.

Tomando palabras de Jürgen Habermas podemos decir que lo justo es “lo que es bueno en igual medida para todos”, esto es una equivalencia o correspondencia entre conductas y bienes, dejando a la libertad de cada cual y de todos definir la vida buena. El problema son los criterios de atribución para que cada uno obtenga lo suyo recordando, como decía Stuart Mills, que la distribución de los bienes depende de los criterios que establezcan las personas.

UN NUEVO CAMINO

Sostengo que al inicio de este siglo debemos ir diseñando un nuevo camino de desarrollo que supere tanto los límites del pensamiento único de raigambre neoliberal como las formulaciones de la izquierda clásica en su vertiente comunista o socialdemócrata.

Para ello es útil recuperar el hilo conductor que lleva del liberalismo al socialismo en su formulación democrática, donde cabe reconocer aportes de pensadores muy diversos que van, para decirlo de algún modo, desde Bernstein hasta Norberto Bobbio. Fluida es hoy la frontera entre liberalismo social y socialdemocracia o socialismo renovado y libertario: la ecuación entre libertad e igualdad los hermana. Ya en las tesis de 1896 en el Partido Socialdemócrata alemán, Bernstein afirmaba que la vitalidad del capitalismo y la ampliación de las clases medias harían posible concebir la democracia no sólo como un medio sino también como un fin, es decir, como la concreción de las aspiraciones socialistas; llegó a sostener que “no hay idea liberal que no pertenezca al patrimonio del socialismo”, y que éste busca crear condiciones para que todos puedan ejercer la libertad: “El socialismo puede ser definido como un liberalismo organizador”, concluía.

Luego de la Revolución Rusa de 1917 y del derrumbe de la experiencia soviética, quedan los procesos de cambio impulsados por las fuerzas socialdemócratas y social cristianas europeas que dieron origen al “estado de bienestar” y por los movimientos de liberación del Tercer Mundo con resultados

diversos. Entre los años '60 y '70 se planteó la necesidad de una nueva vía o de una tercera fase, en especial después del término abrupto de la Primavera de Praga y del gobierno de Salvador Allende, que habían bregado por un socialismo en libertad y democracia. Esta posición se acentúa luego del fracaso de la *perestroika*, incluso en el pensamiento del propio Gorbachov.

Desde entonces también son muchas las voces que, desde la economía de mercado, advierten sobre la necesidad de buscar derroteros. No se trata sólo de la contraposición entre diferentes modelos de capitalismo –el americano y el renano o europeo y japonés–, sino de quienes piensan que marchamos hacia una sociedad muy distinta a la actual, como Daniel Bell, Peter Drucker o Taichi Sakaya: es la sociedad del conocimiento. Si bien la economía de mercado seguirá siendo dominante, la comunidad va adquiriendo nuevas formas de producir y de organizarse, donde el factor decisivo es el conocimiento: aumenta la cantidad de personas ligadas a la producción del saber y tiende a flexibilizarse la estructura de clases.

Múltiples, variados y hasta contradictorios son los antecedentes de la búsqueda de una tercera vía. Cabe mencionar la doctrina social de la Iglesia Católica; el eurocomunismo, sobre todo en el pensamiento de dirigentes del Partido Comunista Italiano como Berlinguer e Ingrao; las críticas al “estado de bienestar” por sus inercias burocráticas y despilfarro de recursos, hasta el empeño filosófico de Jean Paul Sartre y las conocidas formulaciones de Anthony Giddens.

Lo que me interesa destacar ante ustedes es que esta búsqueda necesaria e impostergable no es algo meramente intelectual o especulativo o una política europea alejada de nuestra realidad. Cuando las fuerzas que formaron la Concertación de Partidos por la Democracia llegaron al gobierno luego del término del régimen militar en Chile, impulsaron un programa político que no apuntaba a restablecer el modelo económico-social y político preexistente durante las administraciones de Eduardo Frei y Salvador Allende. Intentaron, en cambio –y con importante éxito–, una fórmula nueva que denominaron “crecimiento con equidad”, que pretendía armonizar el desarrollo económico con las exigencias de justicia social y, en especial, con la derrota a los altos índices de pobreza existentes en el país.

No es esta la ocasión propicia para hacer un análisis a fondo de lo que ha sido la experiencia chilena de transición a la democracia, con sus logros y límites. Pero quiero destacar que la vuelta a la democracia aceleró el crecimiento, detuvo la inflación, consolidó equilibrios macroeconómicos y, al mismo tiempo, redujo drásticamente la pobreza, aumentando los índices de desarrollo humano. Todo ello ocurrió en forma ininterrumpida hasta 1998, cuando la crisis asiática afectó también a Chile, y ahora se discute sobre la mejor manera de retomar esa senda de progreso.

Esto fue posible gracias a un esquema que impulsó importantes políticas sociales por parte del Estado en favor de los más pobres. No se intentó –como

hemos dicho— volver a un Estado protector, sino aunar el esfuerzo público y privado en favor de la justicia social. Queda todavía mucho por hacer, en especial en el campo de la educación y la salud. Pero los logros obtenidos confirman que es posible, en cada país y según sus características propias, poner en marcha un nuevo camino de desarrollo en que libertad y crecimiento económico se complementen en un esquema de justicia social y realización de los derechos humanos.

Uno de los problemas que tenemos en Chile es que una parte importante de la dirigencia política que ha llevado adelante este camino nuevo lo ha hecho concibiéndolo más como el fruto de una transacción, a causa de los límites provenientes de la experiencia autoritaria, que como un resultado de sus propias ideas. Son muchos los que añoran todavía los viejos tiempos y los antiguos paradigmas socialcristiano o socialdemócrata, y en vez de mirar la evolución de los partidos en el mundo toman como ejemplo las políticas que ellos están abandonando.

Para que nuestro camino pueda retomar el dinamismo necesitaríamos que los países del entorno pusieran en marcha políticas análogas, tal como ocurre en la Unión Europea, a fin de ir creando un espacio económico y social compartido. Un país pequeño como Chile en medio de un mercado global es poco lo que puede avanzar. Requerimos asociarnos. Por eso seguimos con entusiasmo los avances del Mercosur y con gran pesadumbre constatamos los problemas que lo aquejan. Ese es nuestro espacio natural, y en forma muy especial la integración plena con la República Argentina, a la cual deseamos pleno éxito en la superación de la crisis que está viviendo.

No podemos dejarnos abatir por el momento difícil que nuestros países atraviesan. Debemos levantar la mirada y recuperar la confianza.

Para impulsar este nuevo camino hace falta, en primer lugar, cambiar de mentalidad, sintonizar con la frecuencia de onda del nuevo siglo, aprender a mirar con otros ojos la sociedad en plena evolución, aceptar el cambio de paradigmas y no dejarse abatir por la incertidumbre que trae consigo el paso de una época a otra; sobre todo tenemos que asumir las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías para expandir la democracia en el mundo y en nuestras sociedades.

El nuevo camino supone una nueva política que supere los esquemas políticos del siglo XIX sin renegar de la historia, una política que sea capaz de poner el acento en los desafíos del porvenir. No se trata de un compromiso ecléctico entre esas posiciones. Se trata de hacer compatible una economía dinámica y competitiva que potencie las libertades, los derechos humanos y el desarrollo humano, y que reconozca el papel central del mercado y de la empresa dentro de un nuevo sistema de gobernabilidad democrática. Siguiendo a Anthony Giddens cabría profundizar en dos criterios para implementar ese nuevo enfoque: la relación entre riesgo y seguridad y un ade-

cuado equilibrio entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados, para evitar la marginalidad de los pobres y el abandono de las élites de sus respectivas sociedades.

Como recuerdan las Naciones Unidas: “Todos los derechos para todos los habitantes de todos los países debería ser la meta del siglo XXI. La Declaración Universal tuvo esa visión hace más de 50 años. El mundo actual tiene la conciencia, los recursos y la capacidad para lograr esa meta a escala mundial. Las libertades humanas nunca han avanzado en forma automática. Y, como en tiempos antiguos, los adelantos del siglo XXI se ganarán con la lucha humana contra los valores divisionistas y contra la oposición de los intereses económicos y políticos arraigados. Los movimientos populares y los grupos de la sociedad civil se hallarán en la vanguardia, despertando la conciencia pública acerca de las violaciones de derechos y presionando en pro de cambios jurídicos y políticos”.

